

AL RESCATE DE LA INSTITUCIONALIDAD

La concepción del Estado-Nación, tal como hoy lo conocemos, es el resultado de un largo proceso de desarrollo que tiene dimensiones psicológicas, sociales, económicas y políticas. Hasta hace poco, la formación del Estado-Nación se aceptaba como el resultado de un proceso continuo en donde las fuerzas del progreso constante lo harían irreversible. El desarrollo puede facilitar la integración social y cultural, como puede ser el origen de nuevas tensiones y confrontaciones. El rescate de la institucionalidad está estrechamente vinculado con la capacidad institucional de resolver problemas e impulsar innovaciones de interés colectivo. La sensación de que nada funciona, de no saber a qué norma atenerse, la pérdida del equilibrio social por el exceso de libertades o por el exceso de orden, refleja condiciones de ambigüedad y confusión entre los individuos y la sociedad. Las normas sociales, las instituciones públicas y privadas, pueden debilitarse o ser inexistentes para orientar el rumbo de lo colectivo.

Repensar lo que queremos ser nos conduce a rescatar la base de nuestras relaciones sociales y darle sentido en nuestra conducta diaria.

LA ANARQUÍA Y LA DESINTEGRACIÓN

En los últimos tiempos hemos sido testigos de las tendencias de desintegración en sociedades que suponíamos desarrolladas. Es el caso de Bélgica y Canadá con las tensiones entre dos grupos socio-lingüísticos, la debacle de la antigua Yugoslavia, la fragmentación de la ex Unión Soviética para responder y solucionar los problemas que el mismo desarrollo exige.

Los procesos de ajuste económico y las medidas de austeridad impuestas contribuyen en buena medida a una inestabilidad crónica que desgasta las instituciones tradicionales. Otra dimensión de las fuerzas desintegradoras es la incapacidad de los sistemas políticos para mantener su credibilidad. Hemos visto cómo el desarrollo de los medios de co-

municación, la superación del analfabetismo, la participación electoral, la masiva urbanización de nuestras ciudades, la gremialización y sindicalización, son fuerzas que pueden favorecer el progreso continuo o entorpecerlo. La ausencia o debilidad de los canales de participación para las nuevas realidades son la fuente misma de la anarquía. La modernización en la práctica implica cambios que debilitan las formas políticas tradicionales, pero no necesariamente produce un sistema político moderno. En otras palabras, la modernización social no es sinónimo de modernización política.

La cultura rentista-populista superó el liderazgo caudillista y logró plantear el liderazgo institucional que sustituyó las élites personalistas y movilizó socialmente al país. Sin embargo, hoy, la cultura rentista-populista ya no es funcional y se tiende a buscar "hacia atrás", hacia un autoritarismo como el "gendarme necesario", la respuesta a los nuevos problemas.

Nuestras políticas económicas y sociales tuvieron como meta distribuir la riqueza generada por los ingresos petroleros. Cuando estos ingresos cayeron, nos quedamos con las políticas de distribución, pero con muy pocos recursos que distribuir. Hemos mantenido el gasto y el consumo y sacrificado la inversión. Culturalmente, resulta incomprensible el deterioro y empobrecimiento, porque la modernización asumía un crecimiento ilimitado. El problema, entonces, es cómo generar una discusión que facilite la comprensión del retroceso social, la complejidad de las nuevas expectativas para responder creativamente ante dicha realidad.

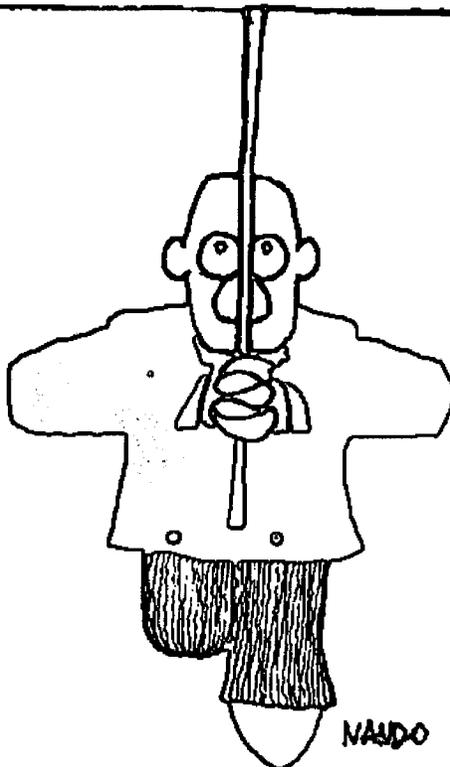
EL ESPEJISMO MODERNISTA

El discurso modernista del desarrollo nos ha vendido la idea del individualismo exacerbado como la única forma de lograr el bienestar y el crecimiento económico que lo sustente. Prueba de ello fue el énfasis durante la década de los ochenta en el equilibrio de variables y ordenamiento macroeconómico como un



Mercedes Pulido de Briceño

Rescatar la institucionalidad implica que la gente sienta las instituciones como propias



fin en sí mismo.

Sin embargo, lo interesante ahora es la fuerza que cobran los obstáculos institucionales en América Latina. Ahora resultan ser una dimensión más extensa y profunda que el planteamiento meramente económico. El esfuerzo que hoy asumen Brasil, Colombia, Chile, se resume en cómo construir unas instituciones en donde quepa la gente. Éste es el desafío planteado.

Poco a poco se abandona la idea de importar instituciones, proceso que fue característico del siglo XIX en América Latina y que ha sustentado el proceso independentista del Africa colonial. Se trata de un esfuerzo por buscar soluciones propias a los problemas propios.

MÁS ESTADO Y MÁS PARTICIPACIÓN

Paulatinamente toma conciencia de la necesidad de lograr soluciones propias promoviendo la participación, nuevos esquemas de participación que rompan el círculo de la desconfianza. El único espacio donde se puede lograr un acuerdo o consenso es en el espacio público.

Romper la desconfianza conlleva facilitar el control social, aceptar la diversidad para que la gente moldee sus propias reglas de juego.

El crecimiento de una sociedad civil fuerte y dinámica requiere un Estado eficiente que garantice el equilibrio de las fuerzas sociales y económicas. La descentralización y desconcentración de competencias es un proceso y compromiso por acercar las instituciones a la gente. Pero, repetimos, es un proceso que requiere mejorar la capacidad administrativa y dotarlas de los ingresos necesarios, al mismo tiempo que redimensionar el eje central administrativo. La participación debiera plantearse en la apertura de canales de control de gestión y ajuste a la diversidad. La tendencia de crear instituciones paralelas o repetir a nivel local la parcela de poder es uno de los mecanismos que más ha contribuido al deterioro de la confianza institucional, porque ello ha implicado instituciones

personalizadas en “donde muerto el ahijado, se acabó el compadrazgo”

La dimensión descentralizadora está en contradicción con el sesgo presidencialista del poder público, que tiende a reproducirse en los gobernadores regionales en relación con el poder local. La descentralización también está en contradicción con las organizaciones políticas y gremiales verticales. Todo ello apunta, como elemento de cohesión nacional, al sometimiento de la acción pública y privada a la ley, a un cuerpo normativo independiente y compartido como visión de la sociedad que queremos. Esto nos lleva a entender la necesidad de más y mejor Estado para enfrentar las carencias de la desconfianza.

Entre 1985 y 1990 todos los sistemas municipales han sido transformados después de cien años de inanición

RESCATANDO NUESTRAS RAÍCES

La economía política de los últimos años ha señalado como freno al desarrollo en América Latina la herencia y organización de las instituciones españolas. Esta crítica pudiera tener como contrapartida la gran flexibilidad que tuvieron nuestras instituciones coloniales y, en especial, el marco normativo de la Ley General de las Indias, que asumía la diversidad de la realidad como el objetivo donde se creaba la norma. El republicanismo trató de modificar estas estructuras, sin duda con buenas intenciones; este intento dio como resultado la importación de una visión de la sociedad y de una cultura que distaba de la realidad cotidiana.

La descentralización ha puesto el énfasis en los estados y no en los municipios. Sin embargo, el ayuntamiento fue la institución básica de nuestra formación política. Fue en el ayuntamiento donde se gestó y declaró la Independencia. Fueron los representantes de los municipios los que en Valencia en 1830 pautaron la separación de la Gran Colombia. El esquema del ayuntamiento español convocaba todas las dimensiones del quehacer público. El esquema federal de los Estados ha generado debates y confrontaciones continuas porque nunca ha acabado de integrarse a nuestra idiosincrasia.

La mundialización de los mercados ejerce presión constante sobre nuestras instituciones. Existe una confusión de querer asimilar industrialización y modernización con capitalismo, y capitalismo con corporativismo. Si recordamos un poco el origen de las corporaciones en el siglo XIX, se sustentaba en dos postulados: el rechazo de una democracia construida a partir de la ciudadanía y el deseo de reaccionar de manera estable a los grandes cambios de la revolución industrial. Estos motivos originales reaparecen hoy en el deseo de una gerencia estable dentro de una sociedad jerarquizada. Los efectos de estas presiones se dejan sentir en los ámbitos de li-

El único espacio donde se pueden lograr consensos y acuerdos es lo público rescatado



bertad y responsabilidad de los representantes elegidos. La idea corporatista asume que los elegidos para la representación popular deben representar simplemente intereses. Para ello surgen las estructuras gestadoras que presionan por los intereses particulares corporatistas, mediatizando la discusión sobre el interés común. El resultado son excelentes índices macroeconómicos y sociedades fragmentadas y desarticuladas.

La resistencia a la mundialización de estas tendencias se ha hecho sentir en Francia en 1995 y recientemente en Corea del Sur. Esta última, convertida en potencia industrial en corto tiempo, cuyos trabajadores desafiaron el poder central que pretendía imponer por la fuerza la flexibilidad laboral como exigencia del ingreso a la OCDE, y reivindicaron la ampliación de la democracia.

El rescate de la institucionalidad pasa por la discusión y el rescate de lo público. En Venezuela y en gran parte de América Latina lo público es sinónimo de gobierno, por lo que la desafectación de las tareas de gobierno influye en el desinterés de la cosa pública. Crasa distorsión. Lo público es lo que interesa a todos, lo que trasciende los intereses privados o corporativos. Es el interés común.

Y es así cómo gran parte de nuestra pérdida de institucionalidad y sensación de anarquía se vincula al concebir lo público como la tierra de nadie. La gente clama por gobernabilidad, por orden, por reglas claras de juego institucional y, paradójicamente, lo que más se ataca y se descalifica son las instituciones.

El rescate de la institucionalidad como propuesta nos descubre la valoración del

espacio público como el único espacio para lograr acuerdos y consensos para llegar a realizaciones concretas. El rompimiento de la desconfianza entre instituciones y ciudadanos nos obliga a repensar en esquemas donde la gente esté presente y actuante en los intereses colectivos. Recuperar el entusiasmo y la promoción de la participación implica revisar nuestras raíces de convocatoria, especialmente en las tareas de gobierno local. Es curioso descubrir que durante más de cien años la mayoría de las leyes municipales permanecieron intocables. Entre 1985 y 1990 todos los sistemas municipales en América Latina han sido modificados, y es allí donde estamos buscando nuestras propias soluciones. ■

Mercedes Pulido es Presidenta de la Junta Directiva de la UNICEF y Directora de SIC



El Estado Nacional es una ilusión; la gente se comporta con civildad y autodominio, porque quiere sostener la institucionalidad